distintas. Constituirían un tema excesivamente amplio para poder estudiarlos conjuntamente, y dicho procedimiento demoraría más de la cuenta la presentación del proyecto sobre relaciones diplomáticas. Por lo tanto, propone que el programa se apruebe tal como está, quedando entendido que se pondrá término a la preparación del tema 2 (Procedimiento arbitral) y del tema 3 (Relaciones e inmunidades diplomáticas), y se tendrá un debate general sobre el tema 4 (Derecho de los tratados), el tema 5 (Responsabilidad de los Estados) y, de ser posible, el tema 6 (Relaciones e inmunidades consulares).

29. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que apoyará la propuesta del Sr. Tunkin si se invierte el orden de los temas 5 y 6.

30. El Sr. SANDSTRÖM advierte que, hasta que la Comisión sepa cuánto tiempo necesitará para terminar los proyectos sobre procedimiento arbitral y relaciones diplomáticas, no es posible tomar una decisión respecto de los demás temas.

31. El Sr. AMADO conviene en que deberían terminarse primeramente los trabajos relativos a los dos temas cuyo examen está casi completado. Luego, la Comisión podría considerar el derecho de los tratados y ver cuánto tiempo le queda para los demás. Como la cuestión de la responsabilidad de los Estados evoluciona constantemente, no causaría perjuicio una pequeña demora en la presentación de un proyecto sobre dicho asunto.

32. El Sr. ŽOUREK, refiriéndose a la sugestión del Sr. François, dice que como las relaciones e inmunidades diplomáticas y las relaciones e inmunidades consulares son temas paralelos que algunos miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General desearían tratar al mismo tiempo, hay razones poderosas para estudiarlos en la relación más estrecha posible. Por otra parte, si bien el informe del Relator Especial sobre diplomacia *ad hoc* aún no ha sido terminado, el tema de las relaciones diplomáticas está mucho más adelantado que el de las relaciones consulares.

33. Tal vez la Comisión podría discutir en el presente período de sesiones los aspectos más importantes de las relaciones consulares y poder así estar en situación de aprobar en el próximo período de sesiones un proyecto provisional, así como su proyecto relativo a la diplomacia *ad hoc*. Podría invertirse el orden de los temas 5 y 6 ya que el Relator Especial sobre responsabilidad de los Estados no tiene inconveniente en ello.

34. El PRESIDENTE, contestando a una pregunta del Sr. BARTOŠ, declara que la inclusión de nuevos temas en el programa de trabajo de la Comisión podrá considerarse cuando se trate el tema 8 del programa provisional.

35. Se han presentado a la Comisión dos sugerencias para que se modifique el orden de los temas del programa provisional. Sin embargo, como dicho orden no es rígido, cree que el programa

podría muy bien aprobarse en su forma actual, entendiéndose que ulteriormente se harán los cambios que procedan.

Así queda acordado.

Queda aprobado el programa (A/CN.4/112).

Declaración del Sr. Tunkin

36. El Sr. TUNKIN dice que desea señalar la grave injusticia cometida con la República Popular de China. El hecho de que un país con unos 600 millones de habitantes, empeñado activamente en establecer una nueva sociedad socialista y un nuevo orden jurídico, no esté representado en la Comisión, constituye una afrenta al derecho internacional.

37. El PRESIDENTE dice que la Comisión toma nota de la declaración del Sr. Tunkin.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.

433.ª SESIÓN

Miércoles 30 de abril de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Provisión de una vacante que se ha producido en la Comisión (artículo II del Estatuto)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión, reunida en sesión privada, ha elegido por mayoría de votos al Sr. Ricardo J. Alfaro, de Panamá, para cubrir la vacante producida por la dimisión del Sr. Jean Spiropoulos, quien ha sido elegido miembro de la Corte Internacional de Justicia.

Procedimiento arbitral : resolución 989 (X) de la Asamblea General (A/CN.4/113)

[Tema 2 del programa]

DEBATE GENERAL

2. El PRESIDENTE se refiere a la labor sobre el procedimiento arbitral realizada por la Comisión en su noveno período de sesiones¹, teniendo en cuenta la resolución 989 (X) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1955.

3. La Comisión decidió² presentar el proyecto sobre procedimiento arbitral no como una convención, sino como un conjunto de normas que podrían servir de orientación a los gobiernos al

¹ Véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo período de sesiones, Suplemento N.º 9*, párrs. 18 y 19.

² *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, Vol. I* (Publicación de las Naciones Unidas, N.º de venta : 1957.V.5, Vol. I), 419.^a sesión, párr. 43.

redactar las disposiciones que hayan de incluirse en tratados internacionales y en acuerdos especiales de arbitraje. Sobre esta base, la Comisión discutió algunos de los artículos principales del proyecto revisado presentado por el Relator Especial en su informe ³ y tomó algunas decisiones al respecto.

4. El Relator Especial ha preparado un nuevo informe en el que toma en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión en su noveno período de sesiones.

5. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta su modelo de proyecto e informe sobre el procedimiento arbitral (A/CN.4/113).

6. El Sr. Scelle se da cuenta de las dificultades con que tropiezan los gobiernos con respecto a los acuerdos de arbitraje. Esas dificultades están relacionadas con las concesiones de soberanía que podría implicar el recurrir al arbitraje, y constituyen el fundamento de muchas críticas formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea General respecto del proyecto sobre procedimiento arbitral presentado por la Comisión en 1953 ⁴.

7. Sin embargo, no surgen esas mismas dificultades en el caso del presente modelo de proyecto sobre procedimiento arbitral. Cuando ese proyecto quede aprobado en su forma definitiva por la Comisión y sea presentado a la Asamblea General, no constituirá una convención sobre arbitraje sino, meramente, un conjunto de normas que se ofrecen a los Estados para su orientación. Los Estados podrían libremente utilizar el modelo en todo o en parte, o recurrir a otros procedimientos.

8. A fin de esclarecer esa situación, se ha cambiado el orden de los artículos. El artículo relativo al compromiso, que en el proyecto de 1953 apareció como artículo 9, ha sido numerado de nuevo como artículo 2, y viene a continuación del artículo 1 relativo al recurso al arbitraje. El artículo que trata de la constitución del tribunal (artículo 4) ha sido colocado en una situación de menor importancia. Por lo tanto, en el nuevo texto se da importancia a la conclusión de un compromiso en lugar de la constitución de un tribunal arbitral.

9. El artículo que se refiere a la arbitrabilidad de controversias (artículo 3) ha sido modificado para tomar en consideración los comentarios hechos por los gobiernos y las observaciones formuladas en la Sexta Comisión. La mayoría de los Estados expresó cierta resistencia a presentar la cuestión de la arbitrabilidad a la Corte Permanente de Arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia.

10. El modelo de proyecto sobre procedimiento arbitral constituye una concesión importante a las opiniones expresadas por los gobiernos si se

compara con los proyectos anteriores relativos al mismo tema aprobados por la Comisión de Derecho Internacional o con el Acta general de 1928 ⁵. El Sr. Scelle no considera que esas concesiones constituyan mejora alguna; han sido introducidas a fin de que los Estados puedan aceptar más fácilmente el modelo.

11. No existe una práctica única de los Estados en cuanto al procedimiento arbitral. Ni siquiera existe uniformidad en la práctica del mismo Estado. Las cuestiones que los gobiernos someten a arbitraje son tan importantes que les es difícil adherirse a un procedimiento único de arbitraje aplicable a todas las controversias.

12. Puesto que no hay una norma general que rija en esa materia, no cabe decir que la labor de la Comisión consista en codificar el derecho existente en materia de procedimiento arbitral. Sin embargo, la Comisión no puede desconocer precedentes tan valiosos como la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, firmada en La Haya en 1907, el Acta General aprobada en 1928, los diversos tratados sobre arbitraje concertados por Suiza y los países vecinos en 1924 y años posteriores, y el Pacto de Bogotá de 1948.

13. Por lo tanto, en su informe más reciente (A/CN.4/113) el Sr. Scelle se dedicó a utilizar esos precedentes. La Comisión tiene el deber de contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional o, por lo menos, de codificar el derecho existente. Así, pues, debe evitar una decisión a la que pudiera calificarse como un retroceso en los sistemas de arbitraje existentes.

14. Se ha planteado la cuestión de si el compromiso de recurrir al arbitraje constituye un tratado. En su opinión ese compromiso tiene en derecho exactamente los mismos efectos que un tratado, y es importante advertir a ese respecto que el artículo 1 del nuevo proyecto especifica, lo mismo que los textos anteriores, que el compromiso de recurrir al arbitraje ha de resultar de un instrumento escrito.

15. Por supuesto, pueden surgir dificultades en el cumplimiento de la obligación de recurrir a arbitraje, lo mismo que en la ejecución de un tratado. La cuestión de la responsabilidad por la no ejecución de un tratado siempre es una cuestión de hecho.

16. El Sr. Scelle se ha dedicado a preparar un modelo de proyecto coherente y espera que la Comisión no lo modificará fundamentalmente ya que, de ser así, aun lamentándolo, no podría continuar siendo responsable de su redacción.

17. Ahora que se ha eliminado del proyecto toda huella de obligatoriedad, no es posible que pro-

³ *Ibid.*, Vol. II (Publicación de las Naciones Unidas, N.º de venta: 1957.V.5, Vol. II), documento A/CN.4/109.

⁴ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período de sesiones, Suplemento N.º 9*, párr. 57.

⁵ Acta general para el Arreglo Pacífico de las Disputas Internacionales. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, *Tratados, Convenciones y Acuerdos vigentes entre el Perú y otros Estados, II. Instrumentos multilaterales* (Lima, 1936), pág. 521.

voque objeciones basadas en la soberanía de los Estados. Se comprende que los gobiernos, y especialmente los gobiernos de Estados de reciente creación, se preocupen de la soberanía del Estado. Sin embargo, no hay nada incompatible con esa soberanía en un proyecto que deja a los Estados en completa libertad para utilizar algunas o todas sus disposiciones en el arbitraje de una controversia, una vez que hayan convenido en someter a arbitraje esa controversia.

18. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que la Comisión, cuando decidió presentar su proyecto sobre procedimiento arbitral como un conjunto de normas, tan sólo, hizo ya una gran concesión a las opiniones expresadas en el seno de la Asamblea General. En su parecer no es necesario hacer ninguna concesión más.

19. Se ha señalado que la mayoría de los Estados representados en la Asamblea General hicieron comentarios desfavorables sobre el sistema propuesto por la Comisión para el procedimiento arbitral. Sin embargo, es significativo que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar haya aprobado una convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar que contiene disposiciones sobre arbitraje, que siguen el modelo propuesto por la Comisión de Derecho Internacional. Ciertamente es que esa misma Conferencia no aceptó el principio de la solución judicial obligatoria de las controversias con respecto a los artículos sobre la plataforma continental. Pero es importante hacer una distinción entre la resistencia de los gobiernos a aceptar una cláusula de arbitraje general y su manera de considerar el procedimiento de arbitraje formulado por la Comisión. Cuando los Estados han aceptado el principio del arbitraje, como en el caso de la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, han encontrado que era aceptable el procedimiento propuesto por la Comisión.

20. El Sr. García Amador recuerda que, cuando la Comisión examinó el tema del procedimiento arbitral en su noveno período de sesiones, el orador puso de relieve que los Estados no se oponían al procedimiento arbitral propuesto por la Comisión sino, más bien, a su aplicación general⁶. Esa opinión ha sido confirmada por lo expresado en la Conferencia sobre el Derecho del Mar, lo cual constituye un estímulo para que la Comisión continúe su labor.

21. El Sr. SCALLE, Relator Especial, da las gracias al Sr. García Amador por señalar a la atención de la Comisión un precedente valioso.

22. La cuestión del arbitraje obligatorio no se plantea en el debate de la Comisión sobre el tema del procedimiento arbitral. La Comisión se ocupa de determinar el procedimiento más satisfactorio

en aquellos casos en que los Estados convengan en someter a arbitraje sus controversias.

23. Carecen de validez las objeciones que se han hecho al proyecto anterior de la Comisión en el sentido de que tenía una tendencia al arbitraje obligatorio.

24. El Sr. ŽOUREK dice que, en virtud de lo previsto en la resolución 989 (X) de la Asamblea General, no hay duda de que la Comisión está obligada a volver a examinar su proyecto tomando en cuenta los comentarios de los gobiernos y los debates de la Sexta Comisión. Por lo demás, la Comisión ya había tomado una decisión en ese sentido en su noveno período de sesiones. En ese sentido, el mejor procedimiento podría ser, como se ha sugerido en el noveno período de sesiones⁷, que la propia Comisión discuta los artículos fundamentales (tales como los artículos 1, 2, 3, 4 y 9) y remita los demás artículos a un comité. Sin embargo, como no es probable que la mayoría de los artículos susciten discusión, el Sr. Zourek no se opondrá a que se vuelva a examinar todo el proyecto en sesión plenaria, si la Comisión puede hacerlo con suficiente rapidez.

25. No comparte la opinión del Sr. García Amador de que las decisiones de la reciente Conferencia sobre el Derecho del Mar acusan un cambio en la actitud de los gobiernos respecto de la cuestión del arbitraje obligatorio. Los artículos que contenían disposiciones relativas al arbitraje obligatorio eran los que se referían a la conservación de los recursos vivos de la alta mar, que varios Estados no quisieron aceptar a menos que se implantara un sistema de arbitraje obligatorio. Por consiguiente, esos artículos constituyeron un caso especial y no puede decirse que la Conferencia haya manifestado una tendencia general hacia la aceptación del arbitraje obligatorio como parte del derecho internacional.

26. El Sr. SCALLE, Relator Especial, dice que su proyecto constituye un conjunto y que no puede considerarse ningún artículo más importante que los demás. Cree que los artículos deben ser examinados por la propia Comisión y que remitir algunos de ellos a un comité sólo llevaría a duplicar el trabajo.

27. Sir Gerald FITZMAURICE estima que no cabe duda alguna de que en los últimos años los Estados han venido ofreciendo cada vez mayor resistencia a aceptar las disposiciones de arbitraje obligatorio. En el período anterior a la segunda guerra mundial había por lo menos mejor disposición a incluir cláusulas sobre arbitraje en las distintas convenciones y rara vez o nunca se hacían objeciones a su inclusión. Ahora la situación es completamente distinta y el orador conviene con el Sr. Žourek en que la reciente conferencia no ha indicado que exista tendencia general alguna en dirección contraria. Por cierto, las observaciones hechas por los gobiernos al proyecto

⁶ *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas, N.º de venta : 1957.V.5, Vol. I), 422.^a sesión.*

⁷ *Ibid.*, 418.^a sesión, párr. 38.

de la Comisión sobre procedimiento arbitral se refieren constantemente a la presunta incompatibilidad de los artículos del proyecto con la soberanía de los Estados. En su opinión, esas críticas no son atinadas, pues no se hubiera obligado más a un Estado a firmar una convención que contuviera el proyecto de artículos preparado por la Comisión, que a firmar otra convención cualquiera que incluyera el recurso al arbitraje obligatorio. Sin embargo, lo que ahora se contempla no es ni siquiera una convención cuya firma entrañe el recurso al arbitraje obligatorio; en realidad, no se trata de una convención, sino sólo de un conjunto de normas modelo. Por consiguiente, si bien está de acuerdo con el Sr. Žourek en que la Comisión debe examinar las observaciones de los gobiernos, cree que llegará a la conclusión de que, por haber cambiado el carácter del proyecto, muchas de esas observaciones no son ya pertinentes, aunque lo hayan sido antes.

28. Coincide plenamente con la premisa fundamental sentada por el Relator Especial de que todo acuerdo de recurrir al arbitraje equivale a un tratado y crea, por lo tanto, obligaciones internacionales, y apoya plenamente su propósito fundamental de sugerir una forma en que los Estados que se propongan seriamente recurrir al arbitraje puedan tener la seguridad de que no se verán frustrados sus propósitos por circunstancias que surjan durante el procedimiento correspondiente.

29. Finalmente, sugiere que al remitir el proyecto de artículos a la Asamblea General, la Comisión podría contribuir a que se establecieran claramente su carácter y su finalidad verdaderos haciéndolo acompañar de un modelo de compromiso redactado de conformidad con ellos.

30. El Sr. AMADO, refiriéndose al texto de la resolución 989 (X) de la Asamblea General, dice que su segundo párrafo no significa que se ponga en tela de juicio el valor intrínseco del proyecto anterior de la Comisión — lo que sin duda no podría hacerse —, pero en cambio hace abrigar dudas sobre la posibilidad de que dicho proyecto sea aceptable por los Estados. A ese respecto, la tarea de la Comisión es ahora mucho más fácil pues la idea de una convención ha sido abandonada en favor de la de un conjunto de normas modelo. El modelo de proyecto preparado por el Sr. Scelle forma un conjunto, como ha dicho el propio autor, y lo que es más, es un texto que difícilmente puede ser mejorado. Por lo tanto, se pronuncia a favor de que sea presentado a la Asamblea General tal como está, dejando que los distintos Estados hagan de él el uso que consideren apropiado, y se opone a que sea remitido a un comité, donde no se haría más que someterlo a una disección innecesaria.

31. Por último, conviene con el Relator Especial en que la cuestión del arbitraje obligatorio no se plantea en absoluto con relación a su proyecto.

32. El Sr. AGO cree que puede ser más correcto referirse al trabajo del Relator Especial como

«proyecto modelo» o «proyecto de normas modelo» más bien que como «modelo de proyecto». Fuera de esto, no tiene crítica alguna de carácter general que hacer al proyecto en sí. En su opinión, el Relator Especial ha hecho bien al elaborarlo de modo que intrínsecamente sean tan satisfactorio como le ha sido posible, sin preocuparse en exceso de que responda o no al parecer actual de la gran mayoría de los Estados. Pues, como ya se ha señalado, la Comisión no está haciendo ahora más que formular sugerencias de normas modelo que los Estados están en libertad de adoptar, en todo o en parte, según les parezca.

33. El Sr. FRANÇOIS felicita al Relator Especial por su nuevo proyecto, que sin duda será más aceptable para los Estados que el anterior. Sin embargo, la Comisión no debe abrigar ilusiones respecto de la acogida que probablemente tendrán sus propuestas, aun en su nueva forma atenuada, por parte de un número considerable de Estados y de la Asamblea General. Conviene, por supuesto, en que ningún Estado tendrá la obligación de firmar un instrumento que contenga los artículos proyectados. No obstante, subsiste el hecho de que muchos Estados, y particularmente los de más reciente creación, creen que el arbitraje obligatorio es incompatible con su soberanía y, en muchos casos, que contraría sus disposiciones constitucionales. Es pues comprensible que se sientan reacios a dar su apoyo a un proyecto que tenga por objeto regularizar el arbitraje obligatorio y extender así su influencia, aunque el proyecto mismo no contenga nada que les obligue a recurrir al arbitraje en contra de sus deseos.

34. También coincide con el aserto de que una vez iniciado el procedimiento arbitral, es fundamental que continúe hasta que se dicte un fallo. Con todo, ha de tenerse presente que una de las ventajas principales del procedimiento arbitral es su flexibilidad, y el valor que los Estados atribuyen a la flexibilidad de los procedimientos ha quedado demostrado por su empleo cada vez mayor del procedimiento de la conciliación, que es todavía más flexible. Es de esperar que varios Estados se sentirán reacios a prescindir de una de las principales ventajas que ofrece el procedimiento arbitral, para dar preferencia a la rigidez que caracteriza al proyecto en algunos pasajes, sobre todo en las disposiciones relativas al nombramiento de los miembros del tribunal arbitral.

35. En conclusión, conviene en que no se ganará nada remitiendo el proyecto a un comité.

36. El Sr. YOKOTA está de acuerdo con el Sr. Žourek en que la Comisión no debe sentirse satisfecha en demasía por el hecho de que la reciente Conferencia sobre el Derecho del Mar haya convenido en el recurso obligatorio al arbitraje en un caso determinado. Lo más alentador es que los artículos aprobados por dicha Conferencia sobre el particular disponen que, una vez iniciado el procedimiento arbitral, no puede interrumpirse hasta que se haya dictado realmente un fallo, pues ése es precisamente el punto que la Comisión está tratando de proteger en su proyecto.

37. Conviene plenamente con Sir Gerald Fitzmaurice en que muchas de las objeciones hechas al proyecto de artículos preparado por la Comisión en su quinto período de sesiones y, particularmente, las objeciones basadas en el principio de la soberanía, revelan una falta total de comprensión sobre la verdadera finalidad de los artículos. Tiene la esperanza de que una vez desvanecida esa incompreensión, serán retiradas muchas de las objeciones.

38. El Sr. SANDSTRÖM dice que el único objetivo a que tendían los artículos preparados en el quinto período de sesiones era el de asegurar que una vez que se hubiera establecido la obligación de recurrir al arbitraje, existiera la posibilidad de hacerla efectiva, cualesquiera que fueran las circunstancias. Ha apoyado el proyecto de artículos y lamenta que la Comisión haya tenido que reducir sus aspiraciones y reemplazarlo por un llamado « modelo de proyecto ». Sin embargo, tal como están las cosas, ese modelo de proyecto resultará útil y, si bien su decisión dependerá forzosamente de la forma definitiva que se dé al proyecto, podrá probablemente apoyarlo.

39. El Sr. BARTOŠ advierte que la Conferencia sobre el Derecho del Mar ha adoptado el principio de arbitraje obligatorio solamente en un punto determinado, considerando preferible que las cuestiones que se diriman en los litigios sobre medidas de conservación, que son de carácter más bien técnico que jurídico, sean sometidas al arbitraje. En todas las demás cuestiones en las que las diferencias serían principalmente de índole jurídica, la Conferencia ha seguido el sistema general de solución pacífica de los conflictos que establece la Carta de las Naciones Unidas, inclusive la posible aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.

40. Pasando a ocuparse del proyecto mismo, el Sr. Bartoš dice que, luego de haber consultado a eminentes jurisperitos yugoeslavos, como ha tenido costumbre de hacerlo antes de los períodos de sesiones de la Comisión, se vió movido a modificar su actitud con relación al proyecto. Desea retirar la reserva general que hizo anteriormente y cree que puede ser preferible aceptar ese modelo, aunque algunas de sus disposiciones sean algo rígidas.

41. Un punto planteado por los jurisperitos yugoeslavos es el de la constitucionalidad del modelo de proyecto, en vista de las disposiciones que definen la competencia de la Corte Internacional de Justicia, cuyas funciones, según su Estatuto, son decidir o dar opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho. Sin embargo, algunas partes del proyecto modelo (por ejemplo, el artículo 4) hacen la Corte parte del mecanismo de procedimiento gradual, atribuyéndole funciones pertenecientes a lo que en alemán se llama *Justizverwaltung*. Teme que, aun con el acuerdo de las partes en litigio, la Corte Internacional no podrá hacerse cargo de funciones tales como la designación de árbitros, hasta que se modifique su Estatuto. Y una revisión del Estatuto de la Corte

entrañaría en realidad una revisión de la Carta. Espera que el Relator Especial podrá obviar esa dificultad.

42. El Sr. SCALLE, Relator Especial, señala que no se pedirá a la Corte que decida cuestiones previas, a menos que las partes en conflicto hayan acordado anteriormente remitir esas cuestiones a la Corte. Con arreglo al Artículo 36 de su Estatuto, la Corte tiene plena competencia para decidir las cuestiones que se le sometan en esas circunstancias. Por otra parte, las peticiones hechas al Presidente de la Corte Internacional de Justicia no se dirigirán a la Corte misma ni al Presidente en calidad de miembro de la Corte, sino al Presidente en su carácter de jurisperito eminente.

43. El Sr. BARTOŠ dice que no le preocupa la competencia que tiene la Corte con arreglo al Artículo 36 de su Estatuto, sino los servicios auxiliares que pueden solicitarse de la Corte, según el modelo de proyecto. Es verdad que el Presidente puede ser eximido de seguir el procedimiento normal, en virtud de las disposiciones del Artículo 38 del Estatuto que autoriza a la Corte a decidir un litigio *ex aequo et bono*.

44. Como la revisión del Estatuto de la Corte a fin de aumentar el número de jueces ya está siendo discutida, también podría plantearse el problema de lo que al fin y al cabo constituye una ampliación relativamente pequeña de las facultades de la Corte.

45. El Sr. VERDROSS estima que el punto mencionado por el Sr. Bartoš está previsto en el párrafo 1 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. Si las partes en litigio que hayan celebrado un tratado de arbitraje difieren en cuanto a la interpretación del tratado o respecto a la existencia de un conflicto, la Corte, en virtud de dicho precepto, es competente para dirimir la cuestión.

46. El Sr. BARTOŠ se muestra de acuerdo. Sin embargo, él se refería simplemente a las demás funciones de naturaleza administrativa cuyo ejercicio se puede requerir de la Corte, de conformidad con el modelo de proyecto, en nombre de las partes en litigio. No se opone por completo a tales disposiciones, sino que las considera simplemente un tanto confusas.

47. El Sr. AGO destaca que los tratados de arbitraje estipulan frecuentemente el nombramiento de alguna persona u organismo neutral, en calidad de tercero o quinto árbitro a título. En particular, prevén que el Presidente de la Corte formule una designación. Sin embargo, la función que el Presidente está llamado a desempeñar en un caso semejante no es del tipo de las que se han regulado o puedan regularse en el Estatuto de la Corte. Cuando se insta al Presidente de la Corte a nombrar árbitros, éste no ejerce una función prevista en el Estatuto; interviene a título individual, en cuanto persona considerada como la autoridad jurídica suprema del mundo. Podrá, desde luego, rehusar, pero no cabe remediar esa dificultad revisando el Estatuto de la Corte. En su conjunto, el problema le

parece más teórico que práctico. Le es imposible recordar ningún caso en que dificultades de la naturaleza descrita por el Sr. Bartoš hayan impedido la aplicación de un tratado de arbitraje.

48. El Sr. SCELLE dice que el Sr. Ago ha explicado la situación admirablemente. En las circunstancias que se contemplan en el artículo 4 del proyecto, el Presidente de la Corte habrá de actuar *ex officio*.

49. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro de la Comisión, advierte que los gobiernos que se oponen al proyecto original por entender que hace obligatorio el arbitraje parecen basarse en una mala interpretación. Sólo es obligatorio en cuanto se trata de dar un carácter hasta cierto punto sagrado a la obligación contraída por los Estados partes, procurando para ello hacer eficaz esa obligación y dominar la posible anarquía de fuerzas, regulando los supuestos intereses a fin de crear una armonía que resulte tolerable para todos. Pero en la forma actual del proyecto no hay ni siquiera este elemento de obligatoriedad y sólo se hace una invitación a reconocer de antemano una norma voluntariamente aceptada. El principio en que se basa ese reconocimiento anticipado está aceptado en el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte. En el texto actual puede discutirse por ser de carácter menos general. No por ser soberanos dejan de estar obligados los Estados a respetar sus compromisos. El orador está firmemente convencido de que en el caso de la mayoría de los Estados la defensa de su soberanía no depende de los medios materiales de defensa, sino de que predomine hasta cierto punto la norma de derecho. Toda doctrina que para las relaciones entre los Estados postule el interés de un solo Estado como criterio último de los valores equivale a la negación de esa norma de derecho.

50. La cuestión planteada por el Sr. Bartoš ha sido bien respondida por el Relator Especial y por el Sr. Ago. Designar una persona que nombrará los árbitros en ciertas circunstancias es una característica bastante común de los sistemas jurídicos nacionales de distintos países. En todo caso, se trata de una cuestión de detalle que podrá plantearse en relación con los artículos pertinentes.

51. Hablando en su calidad de Presidente, declara cerrado el debate general.

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO SOBRE PROCEDIMIENTO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO)

52. El PRESIDENTE supone que, en lo que se refiere al procedimiento, la Comisión desea atenerse a su anterior decisión de que el proyecto sobre el procedimiento arbitral tenga la forma de un conjunto de normas modelo. Propone que la propia Comisión examine uno por uno los diversos artículos del modelo de proyecto, pues la experiencia ha mostrado que no es conveniente remitir los textos al previo examen de un comité. Sin

embargo, los problemas de redacción pueden ser confiados a un comité de redacción, siempre que se le den instrucciones explícitas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 1

53. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta el artículo 1 del modelo de proyecto.

54. Contestando a una pregunta del Sr. AMADO sobre la significación de las palabras « o en cualquier otra estipulación » del párrafo 4 del artículo, dice que los Estados pueden convenir, en un documento distinto del compromiso (v. g., en un tratado de arbitraje), el recurso a ciertos procedimientos. Por ejemplo, si no se hubiera decidido nada respecto al derecho aplicable al caso, las partes en un litigio pueden obligarse mediante una estipulación especial a aceptar el artículo 11 del proyecto o, en otras palabras, a atenerse al párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

55. El Sr. BARTOŠ manifiesta que, tras consulta con eminentes juristas yugoeslavos, ha llegado a la conclusión de que las palabras « una controversia entre Estados », del párrafo 1 del artículo 1 son demasiado restrictivas. Quizás el Relator Especial considere oportuna la ampliación del alcance del artículo y del proyecto, para que abarque las controversias entre organizaciones internacionales y las que se produzcan entre una organización internacional y un Estado, ya que ello no es infrecuente.

56. Además, aunque los juristas yugoeslavos no se oponen a la aplicación de un compromiso de arbitraje a las « controversias eventuales », estiman muy difícil declarar que el compromiso se aplicará a toda futura controversia cualquiera que sea su naturaleza. Sugiere que el Relator Especial examine la inclusión de una frase más específica, tal como « siempre que se haya convenido que habrán de ser sometidas a arbitraje ».

57. El Sr. AMADO pregunta si, en vista de la referencia del párrafo 4 del artículo a los procedimientos convenidos « en el compromiso o en cualquier otra estipulación », el artículo 10 no debiera decir consecutivamente « ... dispone de las más amplias facultades para interpretar el compromiso u otra estipulación ».

58. El Sr. SCELLE, Relator Especial, responde al Sr. Bartoš que no tiene nada que oponer a que el párrafo 1 del artículo se aplique a las controversias en que una o varias de las partes sea una organización internacional. Los miembros de la Comisión podrían reflexionar sobre la forma que haya de darse a esa adición.

59. En comentario a la propuesta de que la referencia a controversias eventuales se limite a casos concretos, manifiesta que como los procedimientos previstos en el proyecto sólo se aplican a las controversias especificadas en el compromiso, casi no es necesaria una frase ligeramente más específica.

60. El Sr. GARCÍA AMADOR apoya la fórmula adicional propuesta por el Sr. Bartoš, por la que se amplía el alcance del proyecto a las controversias entre Estados y organizaciones internacionales. Si la Comisión accede a ello, pedirá también que examine la conveniencia de ampliar el proyecto para que englobe las controversias entre Estados e individuos o entidades sociales, respecto a los acuerdos o contratos que contengan una cláusula compromisoria. Dos acuerdos de este tipo, a saber, el celebrado entre el Gobierno de Yugoslavia y la Sociéte anonyme Losinger et Cie⁸ y la convención suscrita entre el Gobierno de Grecia y la Sociéte commerciale de Belgique⁹, han figurado en casos tratados por el antiguo Tribunal Permanente de Justicia Internacional. El Iran-Consortium Agreement del 19-20 de septiembre de 1954¹⁰ constituye un ejemplo más reciente.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

⁸ Publicaciones de la Corte Permanente de Justicia Internacional, *Pleadings, Oral Statements and Documents*, serie C, N.º 78.

⁹ *Ibid.*, N.º 87.

¹⁰ J. C. Hurewitz, *Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record; 1914-1956* (Princeton, N. J., D. Van Nostrand Company Inc., 1956), Vol. II, pág. 384.

434.ª SESION

Jueves 1 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

**Procedimiento arbitral : resolución 989 (X)
de la Asamblea General (A/CN.4/113) [continuación]**
[Tema 2 del programa]

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO SOBRE PROCEDIMIENTO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO)
[continuación]

ARTÍCULO 1 (continuación)

1. El Sr. ŽOUREK, considerando el artículo en función del acuerdo de presentar el proyecto como modelo de un conjunto de normas, observa que si bien los primeros tres párrafos del artículo enuncian una norma o un principio, el párrafo 4 se asemeja más bien a una explicación respecto del carácter del proyecto. Tal vez el Relator Especial esté dispuesto a estudiar la posibilidad de separar este párrafo y convertirlo en una introducción de todo el proyecto.

2. Comenta las sugerencias que se han hecho en la sesión anterior en el sentido de ampliar el proyecto para que abarque las controversias en que son parte organizaciones internacionales. Conviene en que, dado que dichos organismos están autorizados por sus instrumentos de consti-

tución para concertar acuerdos internacionales, pueden plantearse cuestiones de interpretación y aplicación y puede dar lugar a que esas organizaciones precisen recurrir al arbitraje. Sin embargo, el proyecto no puede aplicarse en su forma actual a las controversias derivadas de los acuerdos en cuestión. Si se quiere que el proyecto trate de este asunto, el orador cree que el mejor modo de indicar la posibilidad de que se aplique el proyecto a las controversias entre Estados y organizaciones internacionales sería añadir un artículo al final del texto en el cual se manifestara que puede aplicarse *mutatis mutandis* a dichas controversias.

3. Por el contrario, las controversias entre los Estados y los particulares o las empresas mencionadas por el Sr. García Amador (433.^a sesión, párr. 60) no pueden tener cabida en el proyecto. Si bien son muy frecuentes los acuerdos entre las grandes empresas y los gobiernos, el arbitraje de los litigios que plantean esos acuerdos corresponde, no al derecho internacional público, sino al derecho internacional privado; se trata de un arbitraje mercantil que debe regirse por el Protocolo sobre Cláusulas de Arbitraje de 1923¹ o por la Convención sobre la Ejecución de los Fallos Arbitrales Extranjeros de 1927², que deberá ser revisada en una conferencia que se celebrará en Nueva York en mayo de 1958.

4. El compromiso modelo cuya preparación ha ofrecido Sir Gerald Fitzmaurice sería una excelente aportación al proyecto. Sin embargo, la Comisión debe recordar constantemente que la práctica de recurrir al arbitraje sólo puede fomentarse si los Estados tienen confianza en el tribunal de arbitraje, y su confianza será mucho mayor si el proyecto no impone restricciones demasiado rígidas al libre ejercicio de la voluntad de las partes, que constituye el fundamento del arbitraje.

5. El Sr. FRANÇOIS señala que puede formularse una objeción muy seria a la ampliación del alcance del proyecto para que incluya las controversias en que son parte las organizaciones internacionales. Los artículos 3, 37 y 39 asignan ciertas funciones a la Corte Internacional de Justicia. Pero la competencia de la Corte está limitada por su propio Estatuto a las controversias entre los Estados. Por lo tanto, debe omitirse toda referencia a controversias en que son parte las organizaciones internacionales y, *a fortiori*, aquellas en que son partes particulares o empresas.

6. Sir Gerald FITZMAURICE declara que sólo quisiera sugerir unas ligeras enmiendas a la redacción del proyecto. Dicho texto ofrece dos grandes ventajas a los gobiernos. Si dos gobiernos deciden someter sus litigios al arbitraje y pueden definir la naturaleza de los litigios en el acuerdo de arbitraje, puede resultarles difícil redactar un compromiso detallado o no estar dispuestos a hacerlo. En ese caso, podrían incluir en el acuerdo de

¹ Sociedad de las Naciones, *Treaty Series*, Vol. XXVII, 1924, N.º 678.

² *Ibid.*, Vol. XCII, 1929-1930, N.º 2096.